

1.- El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Plataforma de Intermediación de Datos

En punto al derecho, el [artículo 14](#) de la LPACAP establece que «... 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento...».

Frente a este derecho, el apartado 2 convierte en obligación la relación electrónica cuando se trate, al menos, de los siguientes sujetos:

«... a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración...».

Este marco relacional se completa con la indicación, que efectúa, el [artículo 12](#) de la LPACAP, de la obligación de establecer asistencia personal para el uso de los medios electrónicos. En concreto, señala que «... Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen...». Se trata de una prescripción de notable importancia en tanto en cuanto demuestra el deseo de que la tramitación de los expedientes y procedimientos sea realizada en clave electrónica pero respetando el derecho de los ciudadanos a una relación fundada en papel. El punto de equilibrio es que la Administración establezca las reglas y las formas de conversión y para ello que establezca las oficinas correspondientes

Esta obligación de asistencia se completa con lo que señala el apartado 2 del mismo [artículo 12](#) cuando señala que «... Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen...».

La efectividad del derecho se trasluce el [artículo 16.5](#) de la LPACAP cuando señala que «...5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el [artículo 27](#) y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios...»

Finalmente, esta regulación del derecho a la relación en papel con la correlativa obligación de la Administración de asumir su digitalización para la incorporación al procedimiento electrónico se completa con lo que señala el [artículo 28](#) de la LPACAP cuando señala que «...4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el [artículo 27](#), con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. 7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten...».

Desde una visión de conjunto de la regulación expuesta podemos decir que la intención decidida del legislador es convertir en electrónico el conjunto del procedimiento y de la actuación administrativa asumiendo para ello la obligación de transformar en documentos electrónicos los que los ciudadanos presentan en papel y avalados por el derecho a la relación no tecnológica que se reconoce para los ciudadanos que no se encuentran entre aquellos que la Ley obliga a una relación de carácter electrónico.

. Algunas regulaciones concretas de la relación electrónica: elementos periféricos al procedimiento administrativo estrictamente considerado

Esto nos permite indicar que existe una fuerte tendencia a que el procedimiento en sede administrativa se desarrolle en forma electrónica como un derecho del ciudadano (renunciable porque éste puede solicitar la relación en papel) a la relación (no solo al acceso) en términos electrónicos. Lo relevante es que este derecho puede ejercerse con medios propios del interesado o con medios propios de la Administración que instruye el expediente y a la que se obliga, ahora, a proveer bienes

1. Los registros de apoderamientos

Se refiere, en la actualidad, a esta cuestión el [artículo 6](#) de la LPACAP que regula el registro electrónico de apoderamientos que había sido ya utilizado en algunas organizaciones en el ámbito del desarrollo de la LAE. En concreto, establece que «... 1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente⁹, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos...»¹⁰.

9

El artículo 5º establece, en relación con lo poderes apud acta mediante comparecencia electrónica que «... 5. El apoderamiento "apud acta" se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros...».

El precepto nos permite indicar, por tanto, que se consagra la obligación de inscripción de los poderes (en sus diferentes categorías) y su calificación jurídica —bastanteo del poder— para la utilización en un determinado procedimiento de todos aquellos que tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo.

Desde una perspectiva organizativa lo característico es que el Registro de Apoderamientos está pensado en clave de continuidad y de eficacia general mientras que los Registros particulares de apoderamientos del correspondiente órgano administrativo cuyos efectos quedan reducidos a trámites específicos en el ámbito de la representación pero sin esa vocación general que, sin embargo, se adquiere por la registración en el general de cada Administración.

El [apartado 4 del propio artículo 6º](#) se refiere a los tipos de poderes que pueden ser inscritos y que identifica en la siguiente forma:

«...4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales. Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración».

Como característica central, el [artículo 6.6](#) establece una duración máxima común de los actos de representación cuando señala que «... 6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción...».

.2. La identificación electrónica

Es esta una cuestión que tiene, igualmente, una formulación y un alcance general que trasciende del procedimiento concreto para situarse en el plano general de las relaciones con la Administración.

La regulación general se contiene en el [artículo 9](#) cuando establece un régimen jurídico que podríamos resumir en la siguiente forma:

A) Principio general

Con carácter común y general y, al margen de la modalidad o de la forma en la que se produzca la relación con la Administración se establece la obligación de la Administración de «... verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente...».

B) La identificación electrónica

No obstante la prescripción general a la que nos acabamos de recurrir es lo cierto que la norma contiene una referencia ineludible a la acreditación mediante procedimientos electrónicos ya que, como se ha dicho, es la opción más clara que se percibe en el ámbito de la nueva LPACAP.

Como consecuencia de esto, el [artículo 9](#), en su apartado 2, establece que «...2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en *certificados electrónicos reconocidos* o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. b) Sistemas basados en *certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico* expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". c) Sistemas de *clave concertada* y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento...».

La referencia a la identificación se hace, por tanto, sobre la base de cualquier sistema siempre que el mismo cuente con un sistema de registro previo como usuario que permita garantizar la identidad. No obstante esta afirmación genérica en la que tienen cabida, por tanto, los sistemas actuales y futuros que cumplan con el requisito se mencionan expresamente los relativos a certificados electrónicos reconocidos, los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico y los sistemas de clave concertada.

Lo importante es que corresponde a cada Administración indicar si admite solo uno o varios de los sistemas enunciados o de los que carácter general cumplan los requisitos generales que se detallan en el artículo.

Este régimen jurídico se completa en el [artículo 40](#) de la LRJSP cuando señala que «...1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos.

Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet...».

c) Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

Una de las características de la LPACAP es la diferenciar entre identificación — contenida en el artículo anterior— y firma y, seguidamente, señalar algunos supuestos en los que se necesita firma frente a los demás en los que carácter común se precisa una identificación.

En este sentido, da un paso más, el [artículo 9](#) LPACAP cuando establece que «...1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de competencia...».

En este apartado no existe un ámbito tan general de libertad sino que la misma se concentra en los tres supuestos previstos: firma electrónica reconocida o cualificada; sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y, en este punto es donde existe un margen adicional de responsabilidad, cuando señala que también son admisibles cualquiera otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los condiciones y términos que se establezcan. Esta remisión final a la capacidad organizativa de las Administraciones Públicas no es, sin embargo, absoluta sino que el propio artículo 9 condiciona la capacidad a que las Administraciones Públicas concreten el ámbito de admisión de cada uno de los medios tanto en los específicamente previstos como en los que se pudieran crear.

Esto se desarrolla en el [artículo 10](#) de la LPACAP establece que:

«.. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica reconocida o

cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de competencia...».

Pero, más allá de la los sistema que resulten admisibles es lo cierto que lo más determinante es la regulación de cuando es preciso utilizar firma electrónica en un procedimiento.

Se refiere a esta cuestión el [artículo 11](#) de la LPACAP cuando señala que:

«... 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

- a) Formular solicitudes.
- b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- c) Interponer recursos.
- d) Desistir de acciones.
- e) Renunciar a derechos...».

Prácticamente podríamos decir que los supuestos en los que se exige firma son idénticos a aquellos que en la legislación procedimental común se precisaba poder para poder actuar en nombre de una persona diferente a la del propio interesado¹¹.

11

En concreto, el [artículo 32.3](#) de la Ley 30/1992 establece que «...3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación...».

Esta regulación en el plano procedimental se completa en la LRJSP cuando el [artículo 42](#) determina que:

«En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente...»¹².

Desde la perspectiva de la utilización de sistemas de firma por parte de los empleados públicos, el [artículo 43](#) de la LRSP completa la regulación indicando que «...1. Sin perjuicio de lo previsto en los [artículos 38](#), [41](#) y [42](#), la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público.2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público...».

. Los registros y su régimen jurídico

La apuesta decidida a la que nos venimos refiriendo por la utilización de medios electrónicos encuentra una traducción directa en el [artículo 16](#) de la LPACAP cuando señala que «... Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares...»

Esta obligación se completa en un inciso posterior del propio artículo 16.1 cuando señala que «... El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal...».

El esquema organizativo pasa, por tanto, por la eventual convivencia entre el Registro Electrónico General y los registros electrónicos de cada organismo. La

característica central es que los asientos de éstos deben reflejarse en aquel pero sin que se impida su existencia.

Desde una perspectiva operativa el [apartado 3 del artículo 16](#) señala que «... 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos...».

Se plantea, no obstante, la forma de acceso a los registros. El [apartado 4 del artículo 16](#), en sintonía con el [artículo 38](#) de la Ley 30/1992, establece que «...4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el [artículo 2.1](#).
- b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- d) En las oficinas de asistencia en materia de registros¹⁴.

14

En relación con la misma debe tenerse en consideración lo que establece la Disposición adicional cuarta cuando señala que «...Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio...».

- e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes...».

Desde una perspectiva operativa, el [artículo 16](#) señala que «.. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros...»¹⁵.

Sin lugar a dudas una de las obligaciones de mayor relevancia para las

Administraciones Públicas que reciban documentos de los interesados es la prevista en el [artículo 16.5](#) de la LPACAP cuando señala que:

«... 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el [artículo 27](#) y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios...».

c) Determinaciones, igualmente, específicas en relación con la transferencia de fondos a las Administraciones Públicas.

Se refiere a esta cuestión, el [artículo 16.6](#) de la LPACAP cuando señala que «... 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios...».

Plataforma de Intermediación de Datos

El objetivo de los servicios de verificación y consulta de datos de la plataforma de Intermediación es hacer posible que la Administración valide o consulte los datos necesarios en la tramitación del procedimiento, evitando al ciudadano aportar los documentos acreditativos o fotocopias pertinentes, permitiendo así hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que hayan sido generados por cualquier Administración.

Las principales ventajas para el ciudadano son la simplificación del papeleo y el ahorro de tiempo. Por su parte, la Administración dispone de los datos correctos y controla posibles falsificaciones. También contribuye a disminuir el volumen de papel gestionado.

En la plataforma se pueden consultar una creciente cantidad de datos distintos (identidad, residencia, desempleo, titulaciones, datos catastrales, registros civiles, prestaciones, etc.). El catálogo completo está disponible en el área de descargas

<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas>

La plataforma de Intermediación ofrece servicios web de verificación y consulta de datos bajo el protocolo SCSPv3. La consulta se puede realizar de manera

síncrona o asíncrona. Para consultar dichos servicios la SGAD pone a disposición de los organismos el Portfolio SCSPv3.